

VOCES DESDE EL CONFINAMIENTO Y LA OCUPACIÓN

El impacto de la crisis del COVID-19 en
los Territorios Ocupados Palestinos y el
Sahara Occidental

Autor: Carlos Díaz Bodoque

على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

**We have on this earth what makes life worth living.
~ Mahmoud Darwish**

El presente documento pretende analizar el impacto de la crisis sanitaria en el conjunto de derechos de la población local saharauí y palestina que vive bajo ocupación militar. Para llevar a cabo este análisis se ha contado con los testimonios de activistas y actores sociales clave del Sáhara Occidental Ocupado y de los campos de refugiados en Argelia, así como de los Territorios Ocupados Palestinos para poder obtener información de primera mano y explicar al mundo su situación actual. Agradecemos su valentía por compartir con nosotros su historia.

En el caso del Sáhara Occidental Ocupado hemos contado con el apoyo de:

Mohamed Mayara, activista saharauí y miembro de Equipe Media

Mina Baali, activista saharauí

Minetu Larabas, Secretaria General de la Unión de Mujeres Saharaui

En el caso de los Territorios Ocupados Palestinos se ha podido entrevistar a:

Badee Zweik, director de la Asociación Nacional de Defensores de Derechos Humanos

Suhail Taha, miembro de Addameer

INTRODUCCIÓN

La pandemia COVID-19 ha impactado las vidas de millones de personas al haber cambiado de forma precipitada nuestras rutinas diarias y haber puesto en jaque el sistema de cuidados, sostenido la mayoría de las veces por mujeres. Esta crisis sanitaria plantea un desafío colectivo sin precedentes al poner en riesgo el derecho a la vida y a la salud de personas de todo el mundo. El avance de la pandemia ha acabado con la vida de cientos de miles de personas al mismo tiempo que encerraba a otros tantos millones de personas en sus casas. Mientras tanto, las diversas medidas que los Estados han tomado para controlar la propagación del virus han cambiado la vida diaria de la ciudadanía en formas impensables hace tan solo un año.

En estos momentos se intuye que lo que comenzó como una crisis sanitaria de alcance global ha acabado por agudizar las desigualdades ya de por sí deterioradas en el marco de la globalización y las políticas neoliberales, sumadas a las dinámicas patriarcales y racistas. La irrupción del virus y la gestión de la crisis ha provocado que la situación de los colectivos más vulnerabilizados se vea aún si cabe más afectada. Según el Secretario General de Naciones Unidas, el Covid-19 tendrá un impacto más grave en los colectivos más vulnerables¹. No cabe duda de que la población de los territorios ocupados del Sahara Occidental y Palestina se encuentra entre ellos.

Ambos territorios viven bajo un estricto sistema de ocupación militar que lleva vulnerando los derechos humanos de forma sistemática y el Derecho Internacional durante décadas.

En el caso de Israel y según el derecho internacional humanitario, Israel es la potencia ocupante en Cisjordania desde el año 1967, incluida Jerusalén Este, la Franja de Gaza y los Altos del Golán² a pesar de que Israel niega que sea una potencia ocupante y hable de Palestina como un territorio en disputa.

¹ Naciones Unidas. Secretario General advierte del impacto desproporcionada de la pandemia en los colectivos más vulnerables Disponible en: news.un.org/en/story/2020/06/1067502

² Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories. Disponible en: undocs.org/A/72/564

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Asamblea General de Naciones Unidas entre otros han afirmado que Israel tiene obligaciones como potencia ocupante según el Derecho Internacional Humanitario a pesar de que la Franja de Gaza y diversas áreas de Cisjordania tengan algún tipo de control por parte de las autoridades palestinas³.

Por otra parte, el Sáhara Occidental, lleva desde 1963 catalogado por Naciones Unidas como territorio no autónomo. Después de este reconocimiento, España como poder administrador del territorio abandonó la colonia en 1975 y dejó el territorio en manos de Marruecos y Mauritania. Desde 1976, Marruecos ocupa la mayor parte del territorio del Sahara Occidental al llegar a un acuerdo con el Estado Español y Mauritania⁴. Aproximadamente la mitad de la población originaria del Sáhara Occidental huyó hacia Argelia cuando Marruecos y Mauritania invadieron sus tierras en 1975 y cuando las autoridades coloniales españolas se retiraron; la otra mitad permanece en el Sáhara Occidental bajo la ocupación marroquí.

La población saharauí que construyó y se estableció en los campos de refugiados, y las generaciones subsiguientes que nacieron y han desarrollado toda su vida allí, se enfrentan a duras condiciones, como el clima seco y árido, pocas oportunidades económicas, escasez de alimento, falta de infraestructuras médicas y una dependencia total a la ayuda humanitaria internacional. La pandemia del Covid-19 ha propiciado que esta situación empeore ya que al doble *lockdown* (el impuesto históricamente por Marruecos y el acaecido de la crisis sanitaria) ha acabado por el momento con numerosos proyectos internacionales que favorecían el desarrollo de diversos proyectos.

El Sáhara Occidental es hoy en día el único Territorio no autónomo del continente africano pendiente de descolonización. Como explica Mina Baali, una de nuestros testimonios: *“somos el conflicto olvidado del mundo, hoy aún con más razón ya que el mundo está ocupado con la propagación de la pandemia”*.

La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia ya en 1975 afirmó que Marruecos no tenía ningún tipo de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental, a esta afirmación se unieron Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Unión Africana⁵. El estado marroquí vulnera sus obligaciones como potencia ocupante al mismo tiempo que pretende cambiar la demografía del territorio ocupado, ofreciendo incentivos económicos a toda persona marroquí que quiera trasladarse y abrir un negocio en el Sáhara Occidental⁶. Esta política ha permitido que el pueblo saharauí se haya convertido, con el paso del tiempo, en una minoría en su propio territorio.

³ Al-Haq and Glan (2020). Business and Human Rights in Occupied Territory: Guidance for Upholding Human Rights. Disponible en: www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/04/27/business-and-human-rights-in-the-opt-interactive-1587981596.pdf

⁴ Yahia H. ZOUBIR (2010) The Unresolved Western Sahara Conflict and Its Repercussions, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 4:2, 85-99, DOI: 10.1080/19370679.2010.12023157

⁵ Al-Haq and Glan (2020). Business and Human Rights in Occupied Territory: Guidance for Upholding Human Rights. Disponible en: www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/04/27/business-and-human-rights-in-the-opt-interactive-1587981596.pdf

⁶ Euractiv: “Morocco pushes development in disputed Western Sahara”. Disponible en: www.euractiv.com/section/global-europe/news/morocco-pushes-development-in-disputed-western-sahara/

1. NUEVO MODELO DE SEGURIDAD GLOBALIZADO: “VIGILANCIA MASIVA ESTATAL”

Históricamente, los estados siempre han estado relacionados con actividades del ámbito de la seguridad. Estas, no obstante, han cambiado a lo largo del tiempo y especialmente se han acelerado durante el S.XXI. Este tipo de actividades del ámbito de la seguridad incluyen ahora la vigilancia masiva a través de tecnologías de reconocimiento facial, monitoreo de dispositivos móviles e inteligencia artificial, producidos principalmente por empresas transnacionales del sector de las tecnologías y la ciberseguridad con el fin de controlar a la población.

Históricamente los Estados han utilizado sus funciones de garantes de la Seguridad Pública como una forma de ejercer su poder sobre la ciudadanía en forma de vigilancia y control. Autores como Foucault⁷, consideran que ese poder y control desde el Estado se ha ido sofisticando para ser omnipresente, pero a la par invisible o imperceptible para la ciudadanía.

Actualmente, estas actividades de vigilancia masiva se ven reforzadas por la relación entre corporaciones y agencias gubernamentales. Con el auge de la ideología neoliberal a finales del siglo pasado, la relación entre las agencias gubernamentales y el sector privado se volvió más sólida. Esta relación es crucial para entender el fenómeno de la vigilancia masiva, ya no sólo por el hecho de que son empresas del sector privado las que proporcionan el conocimiento y tecnología, sino también porque **los datos que las agencias gubernamentales necesitan para el control de la población provienen y se originan en muchos casos de búsquedas en internet, interacciones en las redes sociales y de llamadas de teléfono, con lo que la relación con las empresas de tecnología y comunicaciones se hace indispensable**. Esta relación de conveniencia entre el sector público y privado provoca que la tecnología fluya también hacia el sector privado y este de alguna manera, ejerza control sobre nuestras vidas. Un control donde se “venden” datos sobre nuestro consumo, hábitos, movimientos...

El mundo dejó de ser el mismo después de los acontecimientos del 11-S y una de las consecuencias de este cambio sustancial fue el proceso de securitización de muchos aspectos de la vida cotidiana en nombre de la lucha antiterrorista. Este falso paradigma entre libertad y seguridad se ha ido extendiendo desde principios del S.XXI y en este binomio, la parte securitaria ha ido ganando terreno con el consecuente aumento del control sobre la ciudadanía.

Algunas autoras como Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School, definen a este periodo de flujo y utilización de datos obtenidos por el sector privado y en muchos casos explotados por el sector público, como *surveillance capitalism*⁸, otras autoras como la periodista y activista canadiense Naomi Klein y gracias a la expansión de este sistema en el contexto actual del Covid-19, lo definen como *Screen New Deal*⁹ mientras que el filósofo surcoreano Chul Han lo define como *régimen de vigilancia biopolítica*¹⁰.

⁷ Ver su obra: Foucault, M. *Vigilar y Castigar*. 1975.

⁸ Término acuñado en su obra. "The Age of Surveillance Capitalism" (2019)

⁹ The Guardian. How big techs plan to profit from the pandemic. Disponible en: www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic (Consultado: 25/08/2020)

¹⁰ Euractiv. Covid-19 has reduced us to a society of survival. Disponible en: www.euractiv.com/section/global-europe/interview/byung-chul-han-covid-19-has-reduced-us-to-a-society-of-survival/ (Consultado: 26/08/2020)

Pero más allá de definiciones, lo que está claro hoy en día es que la digitalización de todo elemento y ámbito que nos rodea ha concedido a las empresas tecnológicas del sector de la vigilancia y la ciberseguridad un poder inabarcable. **Nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia masiva y permanente.** Ya no solo nuestra privacidad y nuestras libertades están en riesgo, hasta el punto que nuestro cuerpo se ha convertido en el último campo de batalla del control y la vigilancia social, ya que las nuevas tecnologías recogen y sistematizan datos biométricos de todo tipo, desde nuestras huellas dactilares a la forma de caminar. En definitiva, nuestro cuerpo se ha convertido en otro elemento de esta vigilancia masiva y permanente y especialmente en el Norte Global donde colectivos ya de por sí vulnerabilizados en base a prejuicios, estereotipos y riesgo de uso de una tecnología “ideologizada” son los principales receptores de estos sistemas. Este potencial riesgo en el Norte Global, no obstante, es un hecho que sucede diariamente en el Sur Global como en Palestina y el Sáhara Occidental.

Un contexto de emergencia, como ya apuntó Naomi Klein en su obra “La Doctrina del Shock”, es un buen momento para instaurar un nuevo sistema de reglas. Este nuevo modelo puede reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas para obtener la legitimidad necesaria en la instauración de un Modelo de Estado de Vigilancia Masiva que sea aceptado por la mayoría de la población, bajo el falso dilema de seguridad versus libertad.

2. MARRUECOS Y SU RESPUESTA AL COVID 19: IMPACTO EN LA POBLACIÓN CIVIL SAHARAUI

El Estado marroquí implementó el 20 de marzo de 2020 un *lockdown* generalizado, declarando el Estado de Emergencia con el objetivo de proteger la salud pública.

Estas medidas implementadas por las autoridades marroquíes han puesto en peligro los sectores más vulnerabilizados de la población, especialmente a la población saharauí residente en los territorios del Sáhara Occidental, donde Marruecos ejerce también su jurisdicción a través del sistema de ocupación.

Para **Mohamed Mayara**, director del colectivo de periodistas saharauí Equipe Media, “*nuestros derechos humanos están en juego y al mismo tiempo todos ellos están siendo afectados, antes, durante y después del Covid-19, pero durante la pandemia el dolor se ha vuelto más intenso. El Estado marroquí nos impide disfrutar de nuestros derechos, llevamos generaciones padeciendo todo tipo de hostilidades y después de tanto sufrimiento no poseemos ni una vivienda*”.

La situación del pueblo del Sáhara Occidental en los campamentos de refugiados, en el territorio liberado, en los territorios ocupados y en las cárceles marroquíes está particularmente expuesta a la devastación de la infección por COVID-19.

La naturaleza de la región y sus condiciones climáticas juntamente con el restringido acceso de la población saharauí a recursos sanitarios, complican la implementación de las medidas higiénicas necesarias para evitar la propagación del virus. Además, la insuficiente atención médica que recibe la población enferma por la falta de infraestructura sanitaria en la región hace peligrar la salud de muchas personas.

Después de que Marruecos aprobara el Estado de Emergencia el 23 de marzo de 2020 con la ley 2.20.292, se han establecido penas de prisión de tres meses y una multa de 1300 Dirhams (aproximadamente 120 euros) para cualquiera que incumpla las “órdenes y decisiones tomadas por las autoridades” y para cualquiera que “obstruya” tales decisiones incluyendo “escritos, publicaciones o fotos”.

La activista por los derechos humanos, **Mina Baali** afirma que **“la pandemia del Covid-19 ha sido la excusa perfecta para que el régimen ocupante pudiera aumentar su represión, seguir vulnerando derechos humanos y reprimir a los activistas que denuncian diariamente, aquí en el Sahara y fuera de él, la ocupación y las barbaridades cometidas contra los saharauis desde 1975 hasta ahora. Ahora se corre el riesgo aún más si cabe que no hay ningún tipo de supervisión internacional, aunque nunca haya servido de mucho y Marruecos siempre haga lo que le venga en gana”**.

Es cierto que a raíz de las consecuencias nefastas en el ámbito laboral y económico que la pandemia ha tenido, el Estado Marroquí ha implementado ayudas económicas a familias en situación de vulnerabilidad a través del *Economic Supervisory Committee*, pero estas solo llegan a ciudadanos marroquíes en territorio marroquí, dejando en grave indefensión a la población saharauí¹¹.

Los testimonios recogidos en el marco de este informe afirman que las autoridades marroquíes se han ayudado de este decreto para perseguir, sancionar y enjuiciar a miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo también a periodistas, ciudadanía concienciada y activistas de los Derechos Humanos. La ya de por sí atormentada población saharauí se ha visto castigada por el Reino Marroquí por una doble vía, la civil, en la que son sancionados económicamente y la penal, donde son privados de libertad.

Según **Mohamed Mayara**, que reside en El Ayún, **“cuando Marruecos declaró el Estado de Emergencia, colocó a la población saharauí en una esquina. Nos impidieron circular libremente, pero al mismo tiempo la maquinaria económica marroquí funcionaba perfectamente ya que seguían transportando cemento hacia los territorios ocupados para seguir construyendo. Cuando se trata de explotar nuestros recursos naturales, no existe ningún tipo de restricción”**.

2.1 Los campamentos de refugiados

En los campos de refugiados de Tindouf, al oeste de Argelia, la crisis del coronavirus ha obligado a paralizar muchos de los programas de ayuda humanitaria que la sociedad civil española y otras instituciones europeas estaban llevando a cabo. Una de las iniciativas con más impacto, "Vacaciones en paz", a través de la que cada verano muchas familias del Estado Español acogían a niños saharauis, ha sido suspendida.

Minetu Larabas, escogida en febrero de 2019 como Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis convirtiéndose en la mujer más joven en hacerlo y en la primera que ha nacido y vivido toda su vida en los campamentos de refugiados, añade: **“nuestra situación actual es muy dura, si antes ya estábamos aislados internacionalmente, siempre había alguna posibilidad de tener alguna visita internacional. Actualmente todo esto está parado, nadie viene y nadie puede salir. Argel cerró sus fronteras y no sabemos cuándo podremos salir. Lo más preocupante de todo es que nuestro problema no tiene cabida en los medios de comunicación. Es muy difícil lo que estamos viviendo estos días en los campamentos, especialmente desde que el virus finalmente llegó aquí. La pandemia se sumó a las ya existentes duras condiciones y restricciones que tenemos que soportar los refugiados”**.

La situación en los campos de refugiados, en el corazón del desierto del Sahara es complicada, pero a las más de 175.000 personas que viven allí, el confinamiento no les ha cogido por sorpresa. La población de los campamentos lleva “confinada” más de 45 años y conocen muy bien lo que significa estar aislados del resto del mundo.

¹¹Atalayar. “Morocco will give monetary aid to poorest households”. Disponible en: atalayar.com/en/content/morocco-will-give-monetary-aid-millions-poorest-households-because-crisis (Consultado: 17/08/2020)

Minetu Larabas no obstante, considera que “todo y que la respuesta de los donantes internacionales es claramente insuficiente, sigue siendo vital, dada la gran necesidad y la vulnerabilidad del sistema de salud en los campamentos”. Acaba su participación exigiendo que “no demandamos algo imposible, sino nuestro derecho a votar libremente en un referéndum. Estamos comprometidos con la paz, somos gente pacífica, estamos por todo el mundo y nunca hemos creado ningún problema, luchamos por nuestros derechos. La comunidad internacional ignora nuestra lucha y el conflicto existente, pero hay gente que muere de forma silenciosa por la inacción de la comunidad internacional. Queremos que se escuchen nuestras voces. ¡No hay derechos menores, todos son importantes!”.

2.2 Territorios ocupados del Sáhara Occidental

La represión por parte del Estado marroquí se ha reforzado, produciéndose nuevas detenciones de activistas saharauis, algunas de ellas bajo la nueva ley 2.20.292¹². Desde el pasado 20 de marzo con la entrada en vigor del Estado de Emergencia, la Policía Nacional ha sido la responsable implementar las medidas de seguridad. Según datos aportados por la Presidencia del Ministerio Público marroquí, **alrededor de 91.000 personas han sido procesadas por supuestamente haber violado el estado de emergencia sanitaria**¹³.

Según Mohamed, “el encarcelamiento de activistas saharauis ha sido una constante durante la crisis sanitaria, la mayoría de estos encarcelamientos se han basado en informes policiales, sin ninguna otra evidencia. Continuamos estando perseguidos. **Marruecos ha visto la pandemia como una oportunidad para acabar con la sociedad civil saharauí, limitar nuestra libertad de movimientos, nuestra libertad de expresión y continuar con el expolio de los recursos naturales de nuestra región**”.

Uno de los encarcelamientos más mediáticos que se han producido en plena pandemia ha sido el del periodista marroquí *Omar Radi*, encarcelado desde el pasado 29 de julio después de haberlo interrogado 12 veces en las últimas cuatro semanas y por el cual la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) pide su liberación al entender que su detención es totalmente injusta y basada en acusaciones falsas¹⁴.

Omar Radi está considerado como uno de los periodistas más críticos con el poder institucional marroquí. En el marco de una investigación de Amnistía Internacional, se pudo demostrar como *Omar* había sido vigilado y monitoreado con tecnología de cibervigilancia diseñada por la compañía *NSO Group*¹⁵ (Amnistía Internacional, 2020). El caso de *Omar Radi* es uno más dentro de las numerosas sanciones y detenciones que se realizan por ser una persona crítica con las instituciones¹⁶. Su arresto no es más que una campaña estatal de acoso mediático y judicial para silenciarlo y que ha acabado culminando con su arresto después de diversos meses.

¹² Amnistía Internacional. “Enjuiciamiento de activistas en el marco de la nueva ley de salud”. Disponible en: www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/morocco-and-western-sahara-end-prosecution-of-activists-under-new-health-emergency-law/ (Consultado: 15/08/2020)

¹³ Presidencia del Ministerio Público Marroquí. www.pmp.ma/ (Consultado: 24/08/2020)

¹⁴ Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Disponible en: www.amdh.org.ma/contents/display/353 (Consultado: 23/08/2020)

¹⁵ Amnistía Internacional. “Moroccan activist targeted with network injection attacks using NSO Group’s tools”. Disponible en: www.amnesty.org/en/latest/research/2020/06/moroccan-journalist-targeted-with-network-injection-attacks-using-nso-groups-tools/ (Consultado: 25/07/2020)

¹⁶ Amnistía Internacional. “Crackdown against activists”. Disponible en: www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/morocco-western-sahara-crackdown-against-activists-for-criticizing-the-king-public-institutions-and-officials/ (Consultado: 25/07/2020)

En los últimos meses se han incrementado más detenciones “arbitrarias” por violación de la cuarentena como es el caso de *Ibrahim Mrikli*, activista de los derechos humanos y miembro de la organización saharauí *Nushatta Foundation for Media and Human Rights* y que fue detenido el pasado 21 de mayo por presuntamente faltar el respeto a agentes de policía, lanzarles piedras y violar la cuarentena¹⁷.

Mina Baali confirma que las detenciones han aumentado: “con gran alarma se ha observado que muchos saharauis han sido encarcelados durante estos meses de pandemia y otros muchos han sido multados con la justificación del Estado de Alarma. Es una herramienta más de la represión marroquí hacia el pueblo saharauí”.

Ibrahim documenta a través de la fotografía las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades marroquíes en el Sahara Occidental.

El periodismo es una víctima colateral más de este conflicto. El estado alauita controla la información que aparece en los medios de comunicación y castiga a las voces disidentes. No en vano Marruecos está clasificado en el puesto 133 del índice mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. La represión contra los periodistas saharauis ha sido continua y a esta se suma la denegación de entrada y la deportación de periodistas extranjeros¹⁸.

Mina Baali presenta algunas situaciones del castigo al que se está sometiendo a la población civil y a sus voces críticas con el gobierno marroquí y la gestión de la crisis: “un ejemplo recurrente de estas prácticas (represivas) es lo que ha pasado con una mujer saharauí después de grabar una nota de voz mostrando su malestar y su indignación con las prácticas de las autoridades de ocupación después de dejar entrar en el Sahara Occidental ocupado a cientos de colonos marroquíes que provienen de regiones con altas tasas de contagios. Esta mujer fue convocada por el procurador a una audiencia y ya no tuvimos más noticias de ella. Otro caso de persecución judicial de voces disidentes con el régimen marroquí es el de una enfermera marroquí en la localidad de Buydur que fue convocada a una audiencia judicial por advertir a la población sobre la inexactitud de las cifras de contagios presentadas por Marruecos”.

Mina asegura que “los métodos usados por la Policía y el Ejército marroquí son muy diversos, todos, con el objetivo de silenciar y oprimir a la resistencia saharauí en las ciudades ocupadas, nos bloquean las entradas de las calles, aíslan a cada barrio con centenares de Policías y soldados en él, también cortan las entradas de las calles usando vallas para evitar que la gente se junte, y en definitiva **usan el estado de alarma como un pretexto para aumentar la violencia y la opresión contra la población civil indefensa del Sahara Occidental ocupado**”.

Las autoridades marroquíes parecen haber utilizado el nuevo decreto para procesar a cualquier voz disidente acusándoles de violar la legislación impuesta durante la pandemia. El procesamiento penal es totalmente desproporcionado e indica la pobre libertad de expresión existente en el país. Según denuncia Amnistía Internacional, aumentar la población penitenciaria por cuestiones que se podrían resolver de forma administrativa, agravará aún más los problemas de salud pública existentes en las cárceles, ya de por sí hacinadas¹⁹.

¹⁷ Front Line Defenders. Disponible en: www.frontlinedefenders.org/en/case/arbitrary-detention-human-rights-defender-ibrahim-mrikli (Consultado: 28/07/2020)

¹⁸ Reporteros sin Fronteras. Disponible en: rsf.org/en/news/rsf-report-western-sahara-news-blackhole (Consultado: 20/08/2020)

¹⁹ Amnistía Internacional. “Enjuiciamiento de activistas en el marco de la nueva ley de salud”. Disponible en: www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/morocco-and-western-sahara-end-prosecution-of-activists-under-new-health-emergency-law/ (Consultado: 15/08/2020)

Mina Baali explica la situación de control en la que se encuentran de forma constante, agravada aún más si cabe por el contexto de la crisis sanitaria: **“desde el principio de la pandemia, la vigilancia sobre las casas de los activistas de derechos humanos se ha visto aumentada, de esta forma, las autoridades están al acecho, esperando cualquier “error” por parte de los activistas para atacarles con el pretexto de violar el estado de alarma”**.

Esta situación de indefensión y persecución estatal de los defensores de derechos humanos, activistas y voces críticas con el régimen puede verse prolongada en el tiempo. El pasado 7 de agosto Marruecos prolongó el Estado de Emergencia sanitaria hasta el 10 de septiembre²⁰.

Según *Mina Baali*, defensora de derechos humanos y residente del Sáhara Occidental ocupado: **“los territorios ocupados de la república árabe saharauí democrática viven bajo un bloqueo y constante vigilancia sobre los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales como Facebook y WhatsApp, para abusar aún más de los saharauis que se pronuncian públicamente en contra de las políticas de ocupación del régimen marroquí”**.

Una de las grandes iniciativas por parte de Marruecos para monitorear el movimiento de la ciudadanía en el marco del Estado de Emergencia ha sido la creación de una aplicación móvil al parecer desarrollada por ingenieros y técnicos del Directorado General de la Seguridad Nacional Marroquí (DGSN)²¹.

Marruecos también ha desarrollado una app móvil llamada *Wiqaytna* de uso voluntario. La aplicación pretende identificar a personas que hayan podido estar en contacto con algún positivo por Coronavirus para posibilitar un tratamiento rápido a los casos potenciales. La app ha sido diseñada con el auspicio del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Interior²².

Estas aplicaciones conllevan un serio riesgo al derecho a la privacidad ya que, por un lado, no están sujetas a ninguna periodicidad, es decir, **su uso y el uso de los datos recogidos no tiene periodo de caducidad** y por otro lado, existe el riesgo que la información extraída sea usada contra la propia población al no existir ningún mecanismo de escrutinio público ni transparencia.

Por estas razones, estas iniciativas desarrolladas por Marruecos pueden significar una seria amenaza a los derechos fundamentales y libertades de la ciudadanía marroquí y en consecuencia de la población saharauí si no se utilizan correctamente de acuerdo a criterios democráticos, de transparencia y temporalidad de uso. Estas acciones suponen un paso más en la creación y estabilidad de un sistema estatal de vigilancia²³.

Las voces críticas con el régimen marroquí se ven expuestas a esta vigilancia tal y como nos comenta *Mohamed Mayara*: **“estamos siendo monitoreados constantemente, siempre bajo control y vigilancia. Estoy seguro de ello. Intentamos evitar el control marroquí con aplicaciones alternativas pero el régimen marroquí tiene herramientas tan potentes que puede controlarnos en cualquier**

²⁰ BBC. “Le Maroc prolonge l’état d’urgence sanitaire”. Disponible en: www.bbc.com/afrique/region-53688619 (Consultado: 10/08/2020)

²¹ Atalayar, “Wiqaytna: new tracking app”. Disponible en: atalayar.com/en/content/wiqaytna-new-tracking-app-presented-morocco (Consultado: 18/08/2020)

²² Página web oficial de la aplicación. Disponible en: www.wiqaytna.ma/ (Consultado:15/08/2020)

²³ Middle East Eye. “Morocco’s coronavirus surveillance system could ti pinto Big Brother” Disponible en: www.middleeasteye.net/opinion/risks-moroccos-coronavirus-surveillance-system (Consultado el 12/08/2020)

momento. Tenemos miedo de ser escuchados, de que nuestros teléfonos estén pinchados, de no poder expresarnos con libertad”.

Es cierto que a raíz de las consecuencias nefastas en el ámbito laboral que la pandemia ha tenido, el Estado Marroquí ha implementado ayudas económicas a familias en situación de vulnerabilidad a través del *Economic Supervisory Committee*, pero estas solo llegan a ciudadanos marroquíes en territorio marroquí, dejando en grave indefensión a la población saharauí²⁴.

2.3 Prisiones marroquíes

La situación de los presos en Marruecos en relación con el control sanitario y de higiene para frenar la expansión del Covid-19 es muy grave. El pasado mayo, la Administración de Prisiones Marroquí confirmó que había un total de 397 personas infectadas entre personal laboral y presos²⁵.

El contexto de una prisión es uno de los espacios más complicados de contención del Coronavirus por la sobrepoblación carcelaria y la gran dificultad existente en implementar la distancia social como medida para prevenir la propagación del virus.

Los encarcelamientos de población saharauí han continuado durante el Estado de Emergencia y las autoridades marroquíes no han tenido en cuenta que las condiciones en prisión hacen que la población carcelaria sea más propensa a infectarse por el virus que el resto de la población por las condiciones en las que viven.

A pesar del intento de las autoridades marroquíes en contener la propagación de la pandemia al liberar a algunos presos de sus cárceles²⁶, entre estos presos liberados no estaban los presos políticos saharauíes que cumplen penas de prisión, entre otras cosas, por las protestas que acaecieron durante noviembre del año 2010 en los campamentos de Gdeim Izik²⁷.

La situación de estos presos ha empeorado durante la pandemia, ya que a las duras condiciones en el interior de las prisiones se ha unido la ausencia de visitas familiares y las grandes dificultades de comunicación telefónica. Este contexto no hace más que debilitar la salud física y mental de los presos.

Según Maitre Olfa Ouled, abogada que representa a un grupo de 18 detenidos por los sucesos de Gdeim Izik, *“la pandemia actual suscita temor a empeorar la situación de todos los presos políticos saharauíes y, en particular, de los presos que represento. Todos tienen problemas de salud debido a la*

²⁴ Atalayar. “Morocco will give monetary aid to poorest households”. Disponible en: atalayar.com/en/content/morocco-will-give-monetary-aid-millions-poorest-households-because-crisis (Consultado: 17/08/2020)

²⁵ Anadolu Agency. Coronavirus infections at Moroccan prisons. Disponible en: www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/coronavirus-infections-at-moroccan-prisons-jump-to-397/1835773 (Consultado: 28/08/2020)

²⁶ El Salto Diario: “Tras el indulto de miles de presos en Marruecos, los presos políticos saharauíes siguen en las cárceles”. Disponible en: www.elsaltdiario.com/coronavirus/tras-el-indulto-de-miles-de-reclusos-en-marruecos-los-presos-politicos-saharauis-siguen-en-las-carceles-

²⁷ Human Rights Watch: “Palizas y maltratos por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes”. Disponible en: www.hrw.org/es/news/2010/11/26/sahara-occidental-palizas-y-maltrato-por-parte-de-las-fuerzas-de-seguridad

tortura que sufrieron y no tienen acceso a médicos, lo que los pone en mayor riesgo en relación con el Covid 19²⁸."

3. ISRAEL Y SU RESPUESTA AL COVID 19: IMPACTO EN LA POBLACIÓN CIVIL PALESTINA

La represión sistemática y continua del pueblo palestino por parte de Israel proporciona el marco ideal para la innovación tecnológica, el desarrollo y su posterior comercialización²⁹.

Desde su creación en 1949, el Estado de Israel ha sido considerado como el Estado Vigilante por excelencia³⁰, posicionándose también como uno de los líderes mundiales en la venta y exportación de tecnologías de control de población y vigilancia masiva³¹. Esta política de vigilancia masiva se ha acentuado durante la crisis sanitaria actual.

Los Territorios Palestinos y la Franja de Gaza se han convertido en laboratorio y campo de pruebas de innumerables políticas y herramientas de control, vigilancia y hostigamiento de la población palestina³², que han culminado en grandes infraestructuras como los checkpoints, el muro de separación y todo tipo de mecanismos de vigilancia, escucha y control, que ha permitido al Estado de Israel venderse al mundo como el mayor experto en ciberseguridad. Sin las décadas de ocupación militar controlando todo aspecto de las vidas palestinas, la etiqueta que exportan al mundo de "battle-tested" y "field-proven" no sería posible.

No cabe duda de que el Estado de Israel es uno de los mayores exponentes de este tipo de tecnología. De acuerdo con un informe de Privacy International³³ en Israel estaban asentadas las oficinas principales de 27 empresas del sector industrial de la vigilancia. Este hecho representa una gran diferencia respecto a otros países productores de tecnología similar.

La exportación de este tipo de tecnología al resto del mundo ha ido incrementándose año tras año hasta el punto de representar 6,5 billones de dólares anuales el pasado año. Algunos de los

²⁸ Kaos en la Red. Entrevista a la abogada Maitre Olfa Ouled. Disponible en: [kaosenlared.net/entrevista-a-maitre-olfa-ouled-abogada-defensora-de-los-presos-saharais/#](https://kaosenlared.net/entrevista-a-maitre-olfa-ouled-abogada-defensora-de-los-presos-saharais/)

²⁹ Novara Media. Of course Israel exports arms and policing practices. Disponible en: novaramedia.com/2020/07/07/of-course-israel-exports-arms-and-policing-practices-it-has-spent-decades-battle-testing-them-on-palestinians/ (Consultado: 24/08/2020)

³⁰ Tawil-Souri, Helga. (2016). "Surveillance Sublime: The Security State in Jerusalem", Journal of Palestine Studies, Issue 68

³¹ Consultado en el Policy Paper de N. Miralles (2019) Privatización de la seguridad, control social y su impacto de género en Jerusalén Este. ODHE. Disponible en: www.odhe.cat/es/privatizacion-de-la-seguridad-control-social-y-su-impacto-de-genero-en-jerusalen-este/

³² Gaza: A lab and Showroom (2018). Hamushim and the Coalition of Women for Peace in Israel. Disponible en: www.gazaunlocked.org/content/gaza-lab-and-showroom

³³ The Global Surveillance Industry. Privacy International. Disponible en: privacyinternational.org/sites/default/files/2017-12/global_surveillance_0.pdf (Consultado: 20/08/2020)

productos exportados ya han sido denunciados por numerosas organizaciones por haber sido utilizados contra la sociedad civil, violando derechos fundamentales³⁴.

La crisis del Coronavirus ha propiciado que empresas del sector privado como NSO Group o Anyvision³⁵ se beneficien de un problema de salud pública, al haber desarrollado herramientas tecnológicas de vigilancia masiva. La herramienta Pegasus de NSO Group permite monitorear la localización de la persona supuestamente infectada con Covid-19 a través del acceso a datos de las compañías nacionales de telefonía y encuentra a personas que hayan estado en contacto por más de 15 minutos con la persona infectada³⁶.

NSO Group es una empresa israelí de ciber seguridad que vende su tecnología a numerosos Estados. Establecida en 2010, es una de las mayores empresas de tecnología israelíes, especializada en espionaje tecnológico y con numerosos clientes internacionales. La empresa tiene contactos con el ejército israelí, ya que muchos de sus trabajadores son antiguos militares que se han especializado en ciber seguridad. Este hecho hace que el conocimiento adquirido durante sus años de servicio en el aparato militar israelí bajo la ocupación de territorio palestino, sea trasladado al sector privado y comercializado a cualquier lugar del mundo³⁷.

Según Badee Zweik: *“bajo la pandemia es indudable que la calidad de vida de los palestinos ha empeorado. Han instalado más cámaras para monitorearnos y tenernos bajo control, mientras que a nosotros nos sancionan por no llevar mascarilla no pasa lo mismo con ciudadanos israelíes, la discriminación continua y la gestión del Covid-19 es otra forma de humillarnos y castigarnos”*.

Una de las iniciativas desarrolladas por el Estado de Israel durante la crisis sanitaria y con el ánimo de intensificar la vigilancia estatal de la población palestina ha sido que la persona que desee solicitar un permiso de trabajo, debe hacerlo a través de una app llamada *Al Munasseq* y desarrollada por el Ministerio de Defensa Israelí (IMOD). Esta app da acceso al IMOD a la localización del teléfono móvil y a todos los datos que se han enviado con él, limitando de esta manera el derecho a la privacidad del usuario de esta app, en su mayoría palestinos que la necesitan obligatoriamente para solicitar un permiso de trabajo³⁸.

Estas iniciativas tienen mucho que ver con las declaraciones del ministro de defensa israelí del pasado 29 de marzo que ya de entrada, no invitan al optimismo. Propuso un plan para combatir el coronavirus donde existiría una colaboración estrecha del sector público y privado. El plan consistía en el espionaje de la población israelí y palestina con el uso de herramientas utilizadas para combatir el terrorismo³⁹.

³⁴ Hide and Seek. Tracking NSO's Group Spyware. Disponible en: citizenlab.ca/2018/09/hide-and-peek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-countries/ (Consultado: 28/08/2020)

³⁵ Anyvision system detects facemask dodgers. Disponible en: en.globes.co.il/en/article-anyvision-system-detects-facemask-1001328689 (Consultado: 25/08/2020).

³⁶ Ackerman, Gwen y Benmeleh, Yaacov. (2020) Israeli Spyware Firm want to track data to stop Coronavirus spreading www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/surveillance-company-nso-supplying-data-analysis-to-stop-virus (Consultado: 20/08/2020)

³⁷ Franceschi- Bicchierai, Lorenzo (2020). We Saw NSO's Covid-19 Software in Action, and Privacy Experts are Worried. Vice. www.vice.com/en_us/article/epg9jm/nso-covid-19-surveillance-tech-software-tracking-infected-privacy-experts-worried (Consultado: 22/08/2020)

³⁸ [Who Profits. Exploited and essential. Palestinian labour under Covid-19. Disponible en: whoprofits.org/wp-content/uploads/2020/06/Exploited-and-Essential-Palestinian-Labour-under-Covid-19-2.pdf](https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2020/06/Exploited-and-Essential-Palestinian-Labour-under-Covid-19-2.pdf) (Consultado: 23/08/2020)

³⁹ www.whoprofits.org/updates/nso-group-technologies-of-control/ (Consultado: 20/08/2020)

3.1 Situación en Cisjordania

La represión del pueblo palestino por parte del Estado de Israel también ha visto acentuada durante la crisis sanitaria. Los territorios ocupados palestinos se están enfrentando al Covid-19 desde la realidad de la ocupación militar israelí, que debilita la reacción institucional de las autoridades palestinas y la respuesta de la población palestina al virus.

Según *Suhail Taha*, miembro de *Addameer*, organización palestina que lucha por los derechos de los presos políticos palestinos; *“todos los derechos se han visto afectados durante la pandemia del Covid 19. En Palestina estamos inmersos en plena ocupación militar, esto hace que vivamos permanentemente con nuestros derechos afectados. El Covid 19 ha supuesto una exacerbación del sufrimiento que llevamos padeciendo décadas. La ocupación afecta a todo y a todas, a todo tipo de vidas. En Cisjordania, donde se encuentra la sede de la organización, es aplicada la ley militar, y esta, influencia en gran medida los derechos civiles y políticos de la población palestina”*.

El derecho de acceso a la salud se ha visto negado de forma continuada y el Estado israelí ha tomado todo tipo de medidas para que esto suceda. El pasado julio, fuerzas israelíes demolieron una estructura en la ciudad de Hebrón que se utilizaba como centro para pasar la cuarentena a las personas que supuestamente habían contraído el Coronavirus⁴⁰. La ocupación israelí ha debilitado gravemente los recursos médicos de Cisjordania y de Gaza, hecho que ha aumentado la fuerte dependencia de donantes internacionales⁴¹.

La política de expulsión de población palestina a través de la demolición de sus viviendas no ha parado durante la pandemia ni el periodo de confinamiento⁴². De hecho, la demolición de viviendas palestinas en Jerusalén Este se ha recrudecido llegando a su récord histórico con un confinamiento de por medio. A finales de agosto y con el Covid-19 obligando a la población a confinarse, 89 viviendas palestinas habían sido destruidas cuando durante todo el año 2019 habían sido 104 viviendas o 72 viviendas en el año 2018⁴³. Estas políticas de expulsión de residentes palestinos de Jerusalén Este suponen un castigo colectivo para su población⁴⁴.

Este castigo no acaba con la simple orden de demolición. La burocracia israelí a través de su Administración Civil deniega en la mayoría de los casos los permisos de construcción a familias palestinas. Esto las obliga a construir bajo una gran vulnerabilidad y sabiendo que su vivienda

⁴⁰Anadolu Agency: Israel demolishes quarantine center in Hebron. Disponible en: www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-demolishes-quarantine-center-in-hebron/1917518 (Consultado: 27/08/2020)

⁴¹Al Shababka. Covid 19 meets the occupation. Disponible en: al-shabaka.org/memos/in-palestine-covid-19-meets-the-occupation/ (Consultado: 27/08/2020)

⁴² Human Rights Council. Session 42. 15th July 2020. Disponible en: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_60.pdf (Consultado: 27/08/2020)

⁴³ Haaretz: Israel on track for record number of East Jerusalem home demolitions. Disponible en: www.haaretz.com/israel-news/.premium-jerusalem-on-track-to-set-record-for-house-demolitions-1.9093470 (Consultado: 29/08/2020)

⁴⁴ Al-Haq (2011). Israel's Punitive House Demolition Policy: Collective Punishment in Violation of International Law. Disponible en: www.alhaq.org/publications/8101.html

tiene fecha de caducidad⁴⁵. Durante la demolición, se da a los residentes "la opción" de permitir que las fuerzas israelíes derroquen el edificio, lo que implica pagar una tasa de demolición, o que lo derroquen las propias familias residentes, proporcionando un componente adicional de humillación y afecto psicológico⁴⁶.

Las demoliciones como castigo se han documentado ampliamente durante los últimos años por numerosas organizaciones palestinas e internacionales y se han denunciado como castigo colectivo, violación del Derecho Internacional Humanitario y como crimen de guerra en el marco de numerosas leyes nacionales⁴⁷.

Llamativo es el caso de la ciudad de Hebrón, una de las pocas ciudades palestinas con asentamientos de colonos israelíes dentro de sus murallas. La ciudad se dividió en 2 zonas (H1 y H2) a raíz del protocolo de Hebrón firmado en 1997 y donde trabaja y reside Badee Zweik, director de la Asociación Nacional de Defensores de Derechos Humanos: *"durante la pandemia hemos visto como soldados israelíes invadían el área H1 para lanzar bombonas de gas lacrimógeno y proteger a los colonos que entran y se manifiestan en esta zona. El ejército israelí incluso ha querido que el vecindario palestino sintiera pánico y ha protagonizado actos inmorales al escupir en casas y vehículos de ciudadanos palestinos con el objetivo de propagar el miedo de infección por Covid-19"*.

En cuanto al acceso a los servicios de salud y de acuerdo al Derechos Internacional Humanitario, Israel tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de la población del territorio que ocupa. Israel, como potencia ocupante debe proporcionar a la población del territorio ocupado, entre otras cosas, atención primaria de salud y vivienda y saneamientos esenciales sin ningún tipo de discriminación. El Estado israelí no ha cumplido con esta obligación internacional, provocando la dependencia del sistema sanitario palestino a la ayuda internacional. Esta dependencia ha sido también insuficiente como se demuestra en la incapacidad de las infraestructuras sanitarias palestinas para responder de forma efectiva a la crisis de la Covid 19⁴⁸.

Suhail, de Addammer comenta que: "bajo el Covid-19, estas situaciones de injusticia han aumentado. Un punto importante para tener en cuenta es que durante esta crisis sanitaria mundial los checkpoints controlados por Israel han jugado un papel fundamental para negar el acceso al derecho a la salud de la población palestina".

Además, a finales de marzo, el ejército israelí desmontó y confiscó materiales en diversas comunidades de Cisjordania que iban a ser utilizados para la atención sanitaria de la población palestina. Estas iniciativas locales no son aceptadas por Israel que continúa dejando en situación de vulnerabilidad a la población civil de Cisjordania y negándoles el derecho al acceso a la Salud⁴⁹.

⁴⁵ Haaretz: "Sólo el 7% de los permisos de construcción de Jerusalén van a los barrios palestinos, 07/12/2015. Disponible en:

www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.690403 (Consultado: 25/08/2020)

⁴⁶ Consultado en el Policy Paper de N. Miralles (2019) Privatización de la seguridad, control social y su impacto de género en Jerusalén Este. ODHE. Disponible en: www.odhe.cat/es/privatizacion-de-la-seguridad-control-social-y-su-impacto-de-genero-en-jerusalen-este/

⁴⁷The ICC and Israel: Prosecuting the demolition of palestinian homes. Disponible en: opiniojuris.org/2018/03/22/the-icc-and-israel-prosecuting-the-punitive-demolition-of-palestinian-homes-part-1/#comments (Consultado: 25/08/2020)

⁴⁸ Abdallah, Maha. The Right to Health in the OPT during the Covid-19 pandemic. Disponible en: opiniojuris.org/2020/05/19/the-right-to-health-in-the-occupied-palestinian-territory-during-the-covid-19-pandemic/ (Consultado: 22/08/2020)

⁴⁹ www.btselem.org/press_release/20200326_israel_confiscates_clinic_tents_during_coronavirus_crisis (Consultado: 25/08/2020)

Badee Zweik desde Hebrón nos explica la situación de su ciudad: “el acceso a los servicios de la salud de la ciudad ha sido imposible para los habitantes del área H1. De hecho, un centro para tratar el Coronavirus ubicado en la zona palestina de Hebrón fue derrocado por las autoridades israelíes. El área H2 es la que conecta con la autopista y al no poder acceder a ella, se está desconectado del resto de la región”.

A nivel de derechos laborales, las reiteradas políticas restrictivas de Israel en relación al desarrollo de la economía palestina han favorecido que los palestinos tengan que buscar empleo en territorio israelí. Durante la pandemia y la posterior declaración del Estado de Emergencia, Israel implementó ciertos cambios a nivel laboral y en las condiciones de vida de los trabajadores palestinos que trabajan en territorio israelí. Estos, pasaron de ser trabajadores que iban y venían de sus domicilios al lugar de trabajo, a trabajadores que debían permanecer en territorio israelí por las medidas impuestas por el Estado de Israel a riesgo de quebrantarlas y quedarse sin su principal sustento económico⁵⁰.

De acuerdo con Badee Zweik: “el Estado de Israel en ningún momento ha mantenido la promesa de ubicar en lugares seguros a los trabajadores palestinos que por el confinamiento debían quedarse a pernoctar en territorio israelí y los mantenían hacinados y sin ningún tipo de elemento de protección”.

La situación de estos trabajadores es aberrante, viviendo en condiciones infrahumanas, pero al mismo tiempo teniendo poco poder de elección⁵¹. Según el ministerio de desarrollo social palestino, el número de familias palestinas que se encuentra oficialmente bajo situación de pobreza será doblado en los próximos meses debido a la crisis del Coronavirus⁵².

3.2 La franja de Gaza

Durante agosto de 2020 la población de la Franja de Gaza ha sufrido constantes bombardeos como represalia a lanzamiento de cohetes que provenían de territorio palestino y produjeron diversos incendios en territorio israelí. Además de estas represalias de carácter militar, Gaza también ha sentido un apagón generalizado desde mediados de agosto ya que su planta eléctrica no ha podido mantenerse en funcionamiento por el bloqueo de suministros realizado por el Estado de Israel. Este apagón representa dejar a más de 2 millones de personas con acceso a electricidad tan sólo 4h diarias⁵³. Según la Federación General de Sindicatos Palestinos en Gaza (*General Union of Worker Organizations*) el corte de suministro eléctrico afectará al 90% de las fábricas y talleres existentes en Gaza, obligándoles al cierre inmediato y a dejar en situación de desempleo a más de 50.000 trabajadores⁵⁴. Esta falta de electricidad también repercutirá negativamente en la atención hospitalaria, el cuidado de bebés prematuros y pacientes en unidades de cuidados

⁵⁰ Niezna, M. (2020). Under Control: Palestinian Workers in Israel During COVID-19. Available at: www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2020/07/under-control

⁵¹ www.kan.org.il/item/?itemid=68457 (Consultado: 25/08/2020)

⁵² www.middleeastmonitor.com/20200416-number-of-palestinian-families-living-under-poverty-line-could-double-warns-minister/ (Consultado: 20/08/2020)

⁵³ <https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-gaza-s-only-power-plant-shuts-down-after-israel-cuts-fuel-imports-1.9082294> (Acceso: 23/08/2020)

⁵⁴ Disponible en: www.palinfo.com/news/2020/8/18/ (Consultado: 28/08/2020)

intensivos. Según la directora de Programas para Gaza de *Medical Aid for Palestinians*, actualmente solo hay 78 camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 63 ventiladores⁵⁵.

Otras infraestructuras como el tratamiento de aguas para su consumo y el de aguas residuales también se va a ver afectado por la falta de suministro eléctrico. Esto va a contribuir a que el acceso a agua limpia y potable sea aún más difícil y que no se puedan cumplir las medidas de higiene mínimas durante el Covid-19. A esta situación se suma el hecho que el corte eléctrico se ha producido en verano, teniendo en cuenta las altas temperaturas de la región y el no acceso a corriente eléctrica para utilizar ventiladores o aire acondicionado⁵⁶.

3.3 Prisiones israelíes

Los presos y detenidos palestinos se enfrentan actualmente a una amenaza adicional, el Covid-19. Las autoridades israelíes no han tenido en cuenta la crisis sanitaria en el contexto de las prisiones y los centros de detención, ya que los encarcelamientos de palestinos han continuado durante el Estado de Emergencia cuando incluso la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha recomendado la liberación de presos en situación de vulnerabilidad⁵⁷. En este sentido cabe resaltar que un gran número de presos israelíes han sido liberados como medida preventiva para contener la propagación del Coronavirus⁵⁸.

Suhail comparte que “uno de los mayores desafíos con los que nos hemos encontrado durante la pandemia ha sido el de vigilar la situación de los prisioneros palestinos. En cada visita que hacemos, identificamos muchas violaciones a los derechos humanos. Durante la crisis sanitaria se implementaron nuevas medidas que vulneran numerosos derechos de las personas encarceladas. Algunas de las medidas fueron cancelar las visitas de los abogados y suprimir las visitas de familiares. Estas medidas han significado un gran desafío para nuestra organización y han afectado a el proceso de monitoreo que hacemos con los abogados para cada detención. La inexistencia de teléfonos públicos en las prisiones y la imposibilidad de poder contactar por teléfono implica una dificultad añadida”.

Los presos palestinos son mucho más propensos a infectarse por Covid-19 que el resto de la población palestina, dadas las condiciones de hacinamiento en las que viven y la continua política de negligencia médica ejercida por las autoridades israelíes en prisiones y centros de detención⁵⁹.

Suhail de Addammer, añade que: “las prisiones son un entorno muy fértil para la propagación del virus ya que las medidas de desinfección han llegado muy tarde. Alrededor de 6000 palestinos son detenidos anualmente, esto hace que las condiciones de hacinamiento de las prisiones dominadas por las fuerzas de ocupación se mantengan”.

El Tribunal Supremo israelí dictaminó a finales del pasado julio que los prisioneros palestinos no tienen derecho a protegerse del Coronavirus a través de la distancia social. EL Tribunal rechazó

⁵⁵ The Independent. “If Coronavirus can crushed well equipped healthcare systems, imagine what could happen in Gaza”. Disponible en: www.independent.co.uk/voices/coronavirus-gaza-weddings-cafes-who-hospitals-a9447936.html (Consultado: 25/08/2020)

⁵⁶ Al Alam Tv: Los cortes de electricidad amenazan la vida de los pacientes. Disponible en: www.alalamtv.net/news/5109131/ (Consultado: 25/08/2020)

⁵⁷ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25822 (Disponible en: 20/08/2020)

⁵⁸ The Jerusalem Post. Disponible en: www.jpost.com/israel-news/israel-to-release-hundreds-of-prisoners-to-curb-spread-of-coronavirus-622611 (Consultado: 20/08/2020)

⁵⁹ Middle East Monitor: Medical Negligence by Israel is a major cause of death among Palestinian prisoners. Disponible en: www.middleeastmonitor.com/20190912-medical-negligence-by-israel-is-a-major-cause-of-death-among-palestinian-prisoners/ (Consultado: 22/08/2020)

una petición realizada por el centro por los derechos de las minorías, *Adalah*, en el que instaba a Israel a implementar medidas proactivas para controlar la propagación del Covid-19⁶⁰. Esta decisión pone de relieve el trato discriminatorio dado a la población reclusa palestina que se encuentra expuesta a la pandemia.

Una de las detenciones más controvertidas que han tenido lugar durante el Estado de emergencia ha sido la de *Mahmoud Nawajaa*, coordinador general de BDS⁶¹ en los Territorios Ocupados Palestinos (TOP)⁶². El movimiento BDS fue penalizado por Israel en el año 2017, cuando las autoridades israelíes modificaron la Ley de Entrada en Israel, prohibiendo el acceso al país a cualquier persona que apoye o trabaje para una organización que promueva el boicot de Israel o de entidades israelíes. Actualmente hay un debate abierto en diversos países donde se pretende criminalizar al movimiento, por ejemplo, en mayo de 2019, el parlamento alemán adoptó una moción que definió al movimiento BDS como antisemita. Iniciativas similares han tenido lugar en Estados Unidos, Austria, Reino Unido y Francia⁶³. Promover boicots, desinversiones y sanciones es una forma de defensa no violenta y de libertad de expresión que debe protegerse y poder llevarse a cabo sin ningún tipo de consecuencia legal. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en junio de 2020 que la condena a activistas franceses que apoyaban el movimiento BDS fue una violación a su libertad de expresión⁶⁴.

Tal y como denuncia Suhail: *“la atención médica a los prisioneros antes del Coronavirus ya era mala, pero en el contexto de la pandemia es incluso peor. Uno de los primeros presos que se infectaron con el Covid 19 fue gracias a ser infectado por uno de sus interrogadores durante el interrogatorio. A los presos que se han infectado se les ha negado la atención médica y se les ha obligado a pasar la cuarentena en condiciones deplorables no pudiendo por ejemplo cambiarse la ropa, no recibiendo suficiente agua potable o pudiendo tomar duchas cada 10-12 días”*.

“Las condiciones de encarcelamiento son muy duras, en la mayoría de los casos, los presos se encuentran hacinados. Hay un total de 17 prisiones en Israel y los Territorios Ocupados Palestinos, pero solo una está ubicada dentro de los TOP. La mayoría de los presos palestinos son trasladados a prisiones fuera de los TOP con lo que a las duras condiciones existentes se suma la imposibilidad de tener contacto con familiares cercanos y aumentan las posibilidades de contagiarse al tener Israel muchos más casos de infectados que en los TOP.

Uno de los grupos que más están sufriendo las consecuencias del Covid-19 es la infancia/menores de edad palestinos. A finales de marzo, en plena pandemia, había 194 menores detenidos en prisiones y centros de detención, principalmente en territorio israelí. La mayoría de estos menores no han sido condenados por un Tribunal israelí, pero se encuentran en prisión preventiva con el riesgo que supone mantener a menores encerrados que pueden contraer fácilmente el Covid-19 ya que las medidas de distancia social y otras medidas preventivas son en la mayoría de los

⁶⁰ www.middleeasteye.net/news/coronavirus-israel-supreme-court-palestinians-prisoners-no-rights-social-distancing (Consultado: 24/08/2020)

Sentencia del Tribunal Supremo Israelí. Disponible en:

www.adalah.org/uploads/uploads/Gilboa_prisoners_conditions_petitionSCT_decision_23072020.pdf. (Consultado: 20/08/2020)

⁶¹ Acrónimo que responde a Boicot, Desinversión, Sanciones. Movimiento dirigido por palestinos por la libertad, la justicia y la igualdad. Más información en: bdsmovement.net/es

⁶² Disponible en: www.addameer.org/news/phroc-condemns-arrest-human-rights-defender-mahmoud-nawajaa?fbclid=IwAR3dbSD9CJsmUKclZ5ARbb3toeycPrq9EHnM-d6ZNfVS0w189LLkQGgnpE (Consultado: 21/08/2020)

⁶³ Why is the BDS movement under fire in Germany? Disponible en:

www.middleeastmonitor.com/20190803-why-is-the-bds-movement-under-fire-in-germany/ (Consultado: 22/08/2020)

⁶⁴ El Diario.es. TEDH avala las campañas de boicot a Israel. Disponible en:

www.eldiario.es/desalambre/tribunal-derechos-humanos-bds-israel_1_6019529.html

casos, muy difíciles de conseguir. Esta situación ha sido denunciada públicamente por diversos organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas y Unicef⁶⁵.

Según *DCI-Palestine (Defense for Children International)* la situación de hacinamiento de las prisiones y centros de detención en la que se encuentran estos menores y el limitado acceso a recursos para mantener un mínimo de higiene, hacen que, debido al contexto de la pandemia, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos menores aumente⁶⁶.

4. CONCLUSIONES

Después de comprender de la mano de población civil como es el día a día bajo el Covid-19 en los Territorios Ocupados Palestinos y el Sáhara Occidental no cabe duda alguna que **el impacto de la pandemia ha reforzado la ocupación y ha servido para legitimar algunas acciones que sin el contexto de emergencia en el que nos encontramos hubieran sido de más difícil aplicación.**

A pesar de la legislación internacional, en especial, el derecho internacional humanitario, la población que vive bajo ocupación militar sufre serios y continuos abusos en sus derechos humanos.

En el marco del Estado de Emergencia declarado el pasado marzo por Marruecos llegaron restricciones asociadas a su quebrantamiento como reuniones en vía pública, sanciones económicas y detenciones. Coincidiendo con estas medidas se aprobó también en el Consejo de Gobierno una ley que regulaba el uso de las redes sociales y todo lo que a través de estas plataformas se podía distribuir. Esta medida impuesta por el Estado marroquí busca legitimar la limitación de la libertad de expresión aprovechándose del contexto de la pandemia. El primer borrador de esta ley ya había aparecido en 2018 cuando se presentó para paliar las pérdidas económicas que estaba sufriendo la compañía petrolera Afriquia a causa de un boicot. El Reino marroquí ha utilizado la aparición de la pandemia para, bajo el marco de una ley de emergencia sanitaria, procesar a activistas de derechos humanos, periodistas y ciudadanos por criticar pacíficamente la gestión gubernamental de la crisis del COVID-19.

Por parte del Estado de Israel, el reforzamiento de la ocupación ha quedado reflejado a través de sus políticas de demolición de infraestructuras públicas y viviendas de población palestina, de su política de negligencia médica hacia los presos palestinos, del continuo bombardeo que han realizado sobre Gaza y las restricciones en la importación de material médico y el corte de suministro eléctrico que demuestran que Israel no ha cumplido con sus obligaciones bajo la ley de ocupación y el derecho internacional humanitario. Israel sigue ejerciendo un castigo colectivo sobre la población palestina, ya sea a través de la demolición de viviendas donde inocentes cargan con la culpa de un hecho que no han cometido, de las restricciones de libertad de movimiento de la población palestina mientras se siguen construyendo asentamientos, de los ataques de colonos y la detención de menores de edad.

El Estado israelí ha utilizado esta crisis global para seguir violando los derechos humanos al mismo tiempo que ampliaba su influencia diplomática. La industria de la vigilancia y el control israelí observa este contexto de crisis como una oportunidad para seguir mirando hacia el mercado

⁶⁵ www.unicef.org/mena/press-releases/covid-19-crisis-un-release-children-detention-Palestinian

⁶⁶ www.dci-palestine.org/palestinian-children-detained-by-israel-increases-amid-covid-19-pandemic
(Acceso: 23/08/2020)

internacional con el objetivo de ampliar las exportaciones de tecnologías coercitivas que ya han sido testeadas sobre la población palestina.

Es muy importante luchar contra el quebrantamiento de derechos fundamentales justificados por el contexto de la pandemia ya que pueden conducir a reducir los espacios democráticos y a la criminalización de la sociedad civil. La vigilancia masiva estatal no debe ser normalizada y se deben cuestionar y poner límites a todas las medidas que afecten a los derechos humanos. De lo contrario, cuando la pandemia pase, nos encontraremos en una nueva arquitectura de control y vigilancia masiva basada en las nuevas tecnologías de la seguridad.

No debemos olvidar que incluso desde la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos (ACNUR) se han emitido diversas comunicaciones en las que recomiendan a los Estados que *“...las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID -19 no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una excusa para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos⁶⁷”*.

⁶⁷ ACNUR. Disponible en:
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=S